

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

En estos autos Rol N° **C-2413-2018** del Tercer Juzgado Civil de Talca, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de tres de junio de dos mil veinte, rechazó la demanda, acogiendo la excepción de prescripción deducida por la demandada.

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Talca, por sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, revocó la sentencia apelada de tres de junio de dos mil veinte, y su complemento de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, y en su lugar se declara:

*I.- Que se rechazan todas las excepciones y defensa opuestas, de conformidad con lo expresado en el motivo 1 ), 2 ), ° ° 3°), 4°), 5°), 6°), 7°), 8°), 9°), 10°), 11°) y 12°);*

*II.- Que HA LUGAR a la demanda de lo principal de folio 1, de conformidad con lo expresado en los motivos 13°), 14°) y 15°); y en consecuencia:*

*1.- Se condena al Fisco de Chile, ya individualizado, a un reconocimiento público de que Francisco Urcisinio Lara Ruiz fue víctima de un delito lesa humanidad, restituyéndose en plenitud su honra y dignidad, condenándose a la demandada a pagar una inserción de prensa en un diario de la ciudad de Talca en que se haga público lo sustancial de lo sentenciado por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa Rol N° 95.096-2016. Dicha publicación deberá ser un día domingo en cualquier periódico impreso de circulación regional, o bien en un medio digital.*

*2.- Se condena al Fisco de Chile a pagar una indemnización de perjuicios por daño moral, en beneficio de la demandante, don LUIS ARTURO*



*LARA RUIZ, ya individualizado, por la suma de \$150.000.000.-, con los intereses y reajustes desde que la presente cause ejecutoria, por tratarse de sentencia constitutiva de derechos;*

*3.- No se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida”.*

Contra esa sentencia el Consejo de Defensa del Estado por la parte demandada, dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

**Considerando:**

1º) Que, el Consejo de Defensa del Estado deduce recurso de casación en la forma fundado en el artículo 768 N° 5 en relación 170 N° 4 CPC. Indica que la sentencia recurrida no contiene consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento para la rebaja del monto de la indemnización, lo que resulta evidente al analizar cada uno de los considerandos del fallo recurrido.

Los sentenciadores de alzada no consignaron elemento probatorio alguno o razonamientos de hecho o de derecho, que les hubiesen permitido válidamente considerar, explicar y justificar que el monto otorgado por el fallo apelado encontraba un fundamento diverso de los simplemente discrecionales al regular un quantum que dista, con mucho, de las indemnizaciones concedidas en las sentencias aludidas.

Tampoco se advierte, en tal sentido, que los sentenciadores, en modo alguno, hubiesen aportado algún razonamiento valoratorio específico, o desarrollado algún nuevo análisis respecto de los antecedentes establecidos por la sentencia de primera instancia, que les permita fundar su sorprendente decisión.



Es así como el fallo recurrido omite del todo explicar cómo arribó a la desmedida valoración de perjuicios que termina por conceder, no indica en qué parámetros se basó, no analiza la declaración judicial emitida por el máximo tribunal en el caso análogo que había de servirle de base ni explica, por ende, del modo que lo exige la ley, por qué termina por discriminar a favor del demandante de autos.

Al elevar el quantum indemnizatorio hasta los \$ 150.000.000, además de omitir en la decisión los fundamentos o motivaciones que expliquen la razón que llevó a ello, el fallo recurrido altera y rompe todos los precedentes establecidos con anterioridad en materia de monto indemnizatorio del daño moral, padecido por víctimas por daño reflejo o por rebote, establecidos por sentencias emitidas, como se dijo, en el mismo caso y para víctimas que ocupan el mismo lugar en la línea de parentesco con la víctima directa que el actor de esta especie.

Pide se invalide la sentencia recurrida y acto seguido, sin nueva vista, pero separadamente, dicte con arreglo a la ley la correspondiente sentencia de reemplazo que se expida en torno a las apelaciones deducidas por las partes del presente litigio y rechace la demanda de autos, sin perjuicio de las potestades oficiosas del tribunal del Excmo. Tribunal de casación, con costas.

2º) Que, de la lectura del recurso se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo es haber condenado al fisco por el daño moral padecido por el demandante, sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de derecho que sirven de apoyo a su decisión judicial

Con estos argumentos solicitó la invalidación de la sentencia, a fin que en su reemplazo se resuelva rechace la demanda en todas sus partes.



3º) Que son hechos asentados por los sentenciadores de segunda instancia en su fundamento trece los siguientes:

*“Que habiéndose rechazado las excepciones, deberá entrarse al fondo, de la acción, así la demandante acreditó la existencia del hecho doloso de ejecución política u homicidio, calificado como crimen de lesa humanidad cometido en la persona de Francisco Urcisinio Lara Ruiz, cometido el 5 de octubre de 1973 por agentes del Estado de Chile, específicamente del ejército de Chile; así lo decretan los fallos judiciales acompañados, la Copia simple de hoja N° 193 correspondiente al Tomo III del Informe Rettig, y lo reseñado por los testigos de la causa.*

*Del mismo modo, se acreditó el grado de parentesco y la vinculación del actor de autos; por medio de certificados acompañados y los dichos de los testigos, quienes dan cuenta del daño causado a la familia de la víctima, entre los cuales está el demandante de autos”.*

4º) Que en relación al vicio de casación formal denunciado, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran –en lo que atañe al presente recurso- en su numeral 4º, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.



5º) Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5º transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida *—prosigue el Auto Acordado—* deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida, que una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.



6°) Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017).

7°) Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento



jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

8º) Que útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

*“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras”* (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250).

9º) Que, el que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, deba necesariamente realizarse *prudencialmente*, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no conlleva que esa evaluación sea arbitraria y antojadiza para el órgano jurisdiccional, sino que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela y moderación, lo que por cierto le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, pero que no implica en



modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a arribar a esa conclusión.

**10°)** Que, al dictar la sentencia impugnada revocan la sentencia apelada desechando la excepciones del fisco y acogiendo la condena al fisco por concepto de indemnización de perjuicios a la suma de 150 millones de pesos, los sentenciadores se hacen cargo de los motivos que les llevaron a condenar en el motivo décimo tercero y décimo cuarto indicando que;

*“Que habiéndose rechazado las excepciones, deberá entrarse al fondo, de la acción, así la demandante acreditó la existencia del hecho doloso de ejecución política u homicidio, calificado como crimen de lesa humanidad cometido en la persona de Francisco Urcisinio Lara Ruiz, cometido el 5 de octubre de 1973 por agentes del Estado de Chile, específicamente del ejército de Chile; así lo decretan los fallos judiciales acompañados, la Copia simple de hoja N° 193 correspondiente al Tomo III del Informe Rettig, y lo reseñado por los testigos de la causa.*

*Del mismo modo, se acreditó el grado de parentesco y la vinculación del actor de autos; por medio de certificados acompañados y los dichos de los testigos, quienes dan cuenta del daño causado a la familia de la víctima, entre los cuales está el demandante de autos.*

*Finalmente, se constata la existencia de daño psicológico o moral en el actor, algo que se devela no sólo del natural y lógico entendimiento del asesinato de su hermano, en las condiciones que ocurrió y en la forma en que se desarrollaron los hechos, algo que de por sí puede ser inferido, sino que también dan cuenta de ello los testigos Archibaldo Antonio Villalobos Gaete, quien expresa puntualmente, entre otras frases; “...la familia sufrió un daño terrible uno de los hermanos tuvo que autoexiliarse en España, porque sufría*





*un persecución terrible, bueno eso nos pasó a la mayoría de los chilenos, mi vecino a quien conozco aproximadamente 40 años cambio radicalmente su forma de ser, era un hombre extrovertido hoy en día es casi autista, estoy exagerando pero cambio notablemente su forma de ser, incluso su relación con sus parientes...”; “...la misma situación laboral le trunco su carrera, no se contrata ni se remunera con mucho gusto al pariente de un extremista, un delincuente”. Repreguntado el testigo para que diga si le provoco alguna secuela emocional o psicológica al demandante, éste respondió que “...Sí como le había expresado anteriormente cambio de conducta en forma radical se abstrajo del mundo en sí mismo, es un auto encarcelamiento muy terrible, del que es muy difícil salir...”; además relata que “...El hijo mayor se llama Francisco y le puso ese nombre en memoria y homenaje de su hermano”.*

*Por su parte, la testigo María Elena Villalobos Guzmán indica que se le causó al demandante un “...que gran daño emocional, enorme, se hizo un hombre introvertido, callado, inseguro, temeroso, a grandes rasgos lo que he visto...” lo cual fue causado por “...la muerte de su hermano, el asesinato de su hermano”; con quien tenía una cercana, pues “...De sus 8 hermanos era el hermano más querido era como su partner”. Además fue perseguido, “...irrumpían en su casa los militares buscando armamento, fue un desastre”. Agrega que conoce al demandante “...Alrededor de 40 años y esto (su daño emocional) es comentado en el barrio, sobre todo en el tiempo de Dictadura, esto se conversaba igual...”, indicando que había daño emocional para “...toda la familia con temores, hasta hoy no es una familia que no vive tranquilo, ahora la muerte del hijo de don Francisco, quien murió en la calle ya que nunca aceptó lo ocurrido con su padre...”, explicando que ese hijo del demandante fallecido “...Se llama Francisco, justamente por su tío”. Agrega que además la*



*muerte de su hermano le significó consecuencias laborales para él, "...no volvió a ser el mismo, los seguían a toda la familia, donde fueran, fue discriminado laboralmente, estar cerca de gente así era temer que a uno le pudiera pasar lo mismo...". De esta forma, con los antecedentes allegados, los dichos de los testigos que deponen en autos, quienes está n contestes en el fondo y en la forma, dando razón de sus dichos y, además, considerando la naturaleza del delito que motiva el perjuicio, deberá tenerse por establecido la existencia de los perjuicios, y en consecuencia, deberá acogerse a la demanda.*

*14º) Que, respecto del monto por el cual se acogerá la demanda, si bien es claro que no puede valorarse objetivamente en dinero el precio de una vida ni tampoco puede cuantificarse el dolor causado, pero teniendo presente los montos que se fijan en causas de esta naturaleza y sobretodo porque ni la condición social ni la popularidad de la persona de la víctima o su familia no debe influir al momento de fijar la indemnización, considerando también la angustia, desesperación, y toda la aflicción, que puede, incluso traducirse por factores psicosomáticos, en dolores físicos, y las consecuencias que seguramente pueden perduran por toda la vida, lo que si bien no se puede acreditar que así sea, es dable o posible que así ocurra, atendida las máximas de la experiencia en esta materia, como asimismo por sentido común, lo que no puede estar ausente al ponderar el daño moral; por ello, hay un daño moral incuestionable bajo todas las consideraciones y motivaciones que pueda estimar la doctrina, todo lo cual lleva a este tribunal a estimar que debe acogerse la demanda en un monto de \$150.000.000".-,*

*11º) De lo expuesto, aparece con meridiana claridad que la sentencia materia del recurso dio cabal cumplimiento a las exigencias legales que el*



artículo 170 del Código de Procedimiento Civil le impone, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través del arbitrio en examen. Distinto es el caso que el impugnante no comparta los razonamientos jurídicos o la aplicación de una norma en particular en cuanto a sus requisitos legales, sin embargo dichas discrepancias no pueden servir de base para construir una causal que sólo está dirigida a controlar que la sentencia cumpla con ciertos requisitos formales mas no para cuestionar la aplicación o inaplicación normativa, pues tal reproche la ley lo ha reservado para la casación sustancial, motivo por cual se desestimarán la causales de nulidad formal en análisis.

Cabe destacar que los sentenciadores tomaron en consideración diversos medios probatorios como da cuenta el fundamento décimo tercero para asentar su decisión de condena y determinar el monto a indemnizar.

De manera que la simple discrepancia en las conclusiones a que ha arribado el Tribunal, conforme se ha venido razonando no es materia del recurso interpuesto, por tal razón el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 766, 768 N° 5, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de Talca en la causa Rol 1176-2022, la **que no es nula**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm

N° 5512-2023



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M. No firma la Ministra Suplente Sra. Quezada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.



En Santiago, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

